



Todas las leyes generales del capitalismo se cumplen en este suburbio catalán y casi todas las leyes de las Cortes franquistas dejaron aquí su huella imborrable (zona industrial de Almeda).

Capital roja del Baix Llobregat

VIVIR Y LUCHAR EN CORNELLA

MANUEL CAMPO VIDAL

DESPUES de la ETA, el peligro más grave que tiene España es Cornellà", diría a principios de los años setenta un importante general con mando en Madrid. Al menos, en su boca ponía esa estruendosa frase el entonces alcalde de esa población suburbial de la periferia de Barcelona, José María Ferrer Penadés, hoy subgobernador civil de la provin-

cia. "Cuidado con los obreros de Tarrasa y con la juventud de Cornellà", le habría dicho Tomás Garicano Gofí al ser nombrado ministro a su sucesor en el Gobierno Civil de Barcelona, Tomás Pelayo Ros. Años más tarde, una alta autoridad confirmaría en privado que, siendo don José García Hernández vicepresidente del primer Gobierno Arias Navarro y ministro de

la Gobernación del mismo, había recorrido sin escolta y de incógnito las áreas industriales de Cornellà para conocer personalmente aquella "zona roja". Tal vez su coche llegara a cruzarse con el que en plena huelga general y en otras situaciones muy difíciles llevó a Cornellà al entonces clandestinísimo secretario general del PSUC, Gregorio López Raimundo, que acudía a orientar y a escuchar a los dirigentes comunistas locales en un piso del barrio de las Gavarres o en taller de corte y confección de un barrio extremo, mientras la Policía y la Guardia Civil ocupaban las zonas industriales y los accesos al Ayuntamiento, a las iglesias siempre sospechosas de albergar reuniones y al sindicato vertical.

Pero la conflictividad de esta ciudad, que era sólo un pueblo en 1950, no fue nunca exclusivamente obrera. Junto a las huelgas generales, a la presencia casi pública de las clandestinas Comisiones Obreras, a través de las Uniones de Técnicos y Trabajado-

res de la CNS, encabezando una experiencia elogiada por Marcelino Camacho desde Carabanchel, Cornellà vivió días de intensas movilizaciones populares desde 1971, cuando los vecinos exigieron en una lucha que ha durado años la canalización del río Llobregat, periódicamente desbordado sobre los barrios de cota baja de la población, pero que el 20 de septiembre de 1971, superando sus propios records, entró en 1.232 viviendas y dejó a 10.000 trabajadores en paro momentáneo.

De 11.000 a 100.000 habitantes

Con 2.000 habitantes a principios de siglo y 11.000 en 1950, Cornellà, como el resto de ciudades del cinturón industrial de Barcelona —L'Hospitalet, Santa Coloma, Sant Adrià, Sant Boi, El Prat, etcétera—, ha vivido una espectacular explosión demográfica. Hasta 1960, es decir, en diez años, dobló su pobla-



Manifestación de vecinos a favor de la canalización del río.

VIVIR Y Luchar EN CORNELLA

ción, que en la mitad del siglo era de 11.000 habitantes. En los cinco años siguientes volvió a doblar los 22.000 habitantes de 1960; en 1970 rebasaba los 80.000 y en el momento de celebrarse las elecciones municipales roza los 100.000.

La previsión es un concepto desconocido para esta población. El Plan Comarcal de Barcelona y otros municipios aprobado por Ley en 1953 preveía para esta población industrial y dormitorio a un tiempo que alcanzaría los 60.000 habitantes en el año 2000, cifra que superó con treinta y tres años de adelanto sobre el horario previsto. La industrialización —200 matriculas en 1939 y 2.000 en 1968— se hizo sin apenas planificación previa alguna, con lo que se llegó a una situación en que casi todas las empresas, aunque algunas ocupan a más de 500 trabajadores, eran ilegales hacia 1970, cuando cesó un alcalde que se mantuvo dieciocho años en el cargo: el alcalde Rius, que resultó casi peor que todas las riadas que sufrió la población (en 1947, 48, 62 y 71).

Más densidad que en Manhattan

Todas las leyes generales del capitalismo se cumplen en este suburbio catalán y casi todas las leyes de las Cortes franquistas dejaron su huella imborrable, especialmente las relativas a la vivienda. La reproducción de la fuerza de trabajo al mínimo coste, tan mínimo que ni siquiera se realizaron durante años infraestructuras que debían asegurar la seguridad física de los trabajadores —como es el caso del Llobregat sin canalizar—, se cumple sin matiz alguno. La separación de residencia y empleo —el ocio va poco más allá de algunas peñas flamencas, un patronato cultural en la zona catalana y escasas instalaciones deportivas— se cumple también como eficaz instrumento de "control social", al observar que un 60 por 100 de la población se traslada diariamente para trabajar a Barcelona o poblaciones colindan-

tes (L'Hospitalet, Esplugues, Sant Joan Despi, Sant Boi). La vivienda como vía de sobreexplotación de clase obrera que añadir a la del proceso productivo cumple también cualquier nivel exigido. Y así sucesivamente.

Pero no ha habido ley urbanística de las Cortes del franquismo que no haya dejado su huella en Cornellà, especialmente la que promulgaba el Plan de Urgencia Social para la Vivienda, en 1957, que está en el origen de la edificación del barrio de San Ildefonso, también denominado oficialmente con el despectivo sobrenombre de "Ciudad satélite". Con casi 60.000 habitantes de difícil censo y sobre una superficie inferior al kilómetro cuadrado —el término municipal de Cornellà no llega a setecientas hectáreas—, San Ildefonso tiene

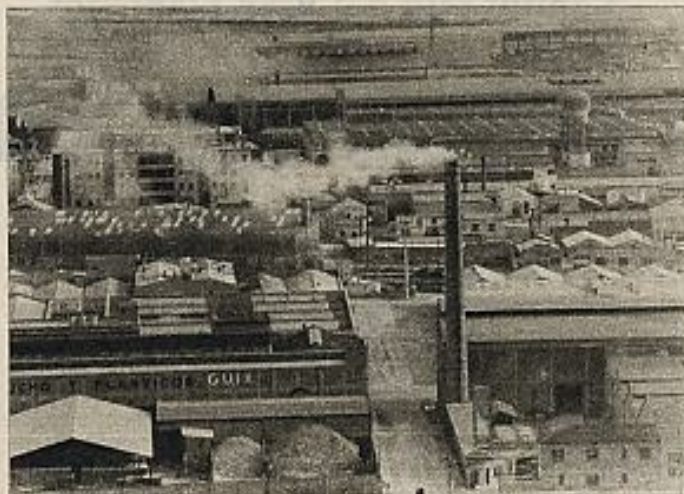
una densidad de 94.545 habitantes por kilómetro cuadrado. O lo que es lo mismo, para que el lector no crea que se trata de un error de imprenta, que si Londres dispone de 290 metros cuadrados por habitante, Madrid 260 y el barrio neoyorquino de Manhattan sólo 34, en San Ildefonso se dispone de poco más de diez metros cuadrados por habitante.

Por el impacto de la construcción de este gigantesco barrio a manos de una inmobiliaria que presidía el actual presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, Josep María Figueras Bassols, con las 10.000 viviendas escrituradas una a una en la notaría del entonces alcalde de Barcelona, don José María de Porcióles y Colomer, en 1965 había en Cornellà 11.000 ni-

ños sin escuela. El mercado llegó en 1970, diez años después de que el barrio comenzara a construirse; el Metro, con quince años de retraso; las piscinas y zonas deportivas prometidas por Construcciones Españolas en el proyecto es posible que no lleguen jamás, y la única Casa de Cultura existente desapareció después con el crecimiento de la espiral conflictiva, al ser ocupada permanentemente por un destacamento de la Policía Armada.

Entre tanto, un bar en el que tenía su sede social la Peña Fosforito, una Asociación de Ferroviarios que agrupaba a buena parte de los 600 empleados de Renfe vecinos del barrio y una entidad denominada Casino de San Ildefonso, que disponía de una habitación de ocho metros cuadrados —conviene repetir que eran ocho y no más los metros cuadrados—, fueron hasta hace dos o tres años los únicos centros asociativos existentes. Una nube de profesores y urbanistas, desde Franco Ferraroti a Manuel Castells, pasando por Henri Lefebvre, se asomaron por allí en años pasados a comprobar con sus ojos que habían recibido una explicación objetiva sobre las verdaderas condiciones de vida del barrio.

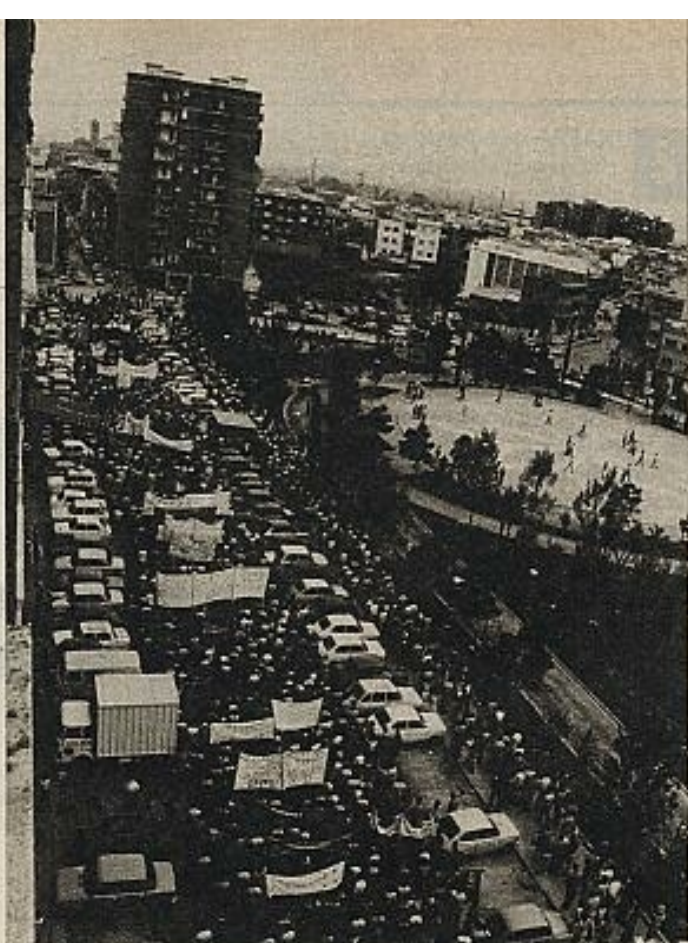
Después se autorizó finalmente la Asociación de Vecinos; antes se había abierto por fin el apeadero de Renfe que ni los propios vecinos ferroviarios lograron imponer durante años; los grupos escolares han ido ocupando los escasos solares todavía libres en dura competencia con las constructoras especializadas en retales y permutas; la construcción de un pabellón polideportivo con sala de actos para 200 personas ha permitido una débil expresión cultural en combinación con una biblioteca subvencionada por una Caja de Ahorros. Un par de cines —los más grandes de España en capacidad—, con una inamovible programación subcultural; los tenderetes del PSUC y del PTC para la fiesta mayor del barrio, donde actúa el grupo de poesía popular Miguel Hernández; una larga fila de ancianos al sol sacados de



Viviendas e industrias en un mismo barrio. No hubo planificación.



El barrio de San Ildefonso, con más densidad que el de Manhattan.



Después de la inundación de 1971 (izquierda, foto de Ramón Rull; derecha, manifestación contra el paro en Cornellà).

cualquier pueblo de Andalucía o Extremadura e indigestados ante tanto cemento; otra fila de jóvenes sin trabajo que trafican alguna droga blanda; algunos locales de futbolines, a los que a veces acuden señores con coche desde Barcelona para invitar a algunos adolescentes a dar un paseo, y, una vez por año, el Teatro Chino de Manolita Chen, forman parte de una fotografía borrosa de la vida en las calles. La vida en las casas ya se sabe: unas horas para reproducir literalmente la fuerza de trabajo, y el resto, a ver la televisión.

El Gobierno ayudó con un cuartel de Policía

El alcalde de Cornellà, Ferrer, el hoy subgobernador, quiso poner remedio a tan deprimente cuadro y elaboró un Plan de Urgencias para Cornellà y su comarca ya en 1972. La ecuación era bien sencilla: la difícil situación urbanística y social sumada a la concienciación de la población favorecida por el movimiento obrero y ciudadano, daba como inevitable el resul-

tado final: "conflicto". Se trataba de invertir unos centenares de millones canalizando el Llobregat, además de prolongar el Metro, construir algunos grupos escolares y 200 viviendas sociales, invertir en sanidad pública, en cultura y deportes, y la conflictividad de la temible capital del Baix Llobregat se vería reducida.

Para presentar su proyecto ante el entonces vicepresidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco, viajó el alcalde a Madrid, acompañado del gobernador, Pelayo Ros, y del delegado de Sindicatos, entonces José María Socías Humbert. Pero la lógica del sistema político vigente aplastó el proyecto municipal. El almirante, a la vista de los resultados, debió tomar la ecuación que al final daba como resultado una alta conflictividad, y debió estimar que salía más a cuenta resolver el problema de la conciencia ciudadana que la difícil problemática urbanística y social, por lo que dispuso la creación de un cuartel de la Policía Armada en Cornellà, en los locales de la Casa de Cultura de San Ildefonso, que era donde se celebraban reuniones y conferencias sobre los problemas del barrio. Y así terminó el Plan de Urgencia.

Un alcalde socialista o comunista

Pero las urgencias siguen en pie. Y también la esperanza que ha dado en estos años luchas y victorias importantes hasta el punto de que es posible un insólito circuito turístico a la población señalando una conquista popular detrás de cada mejora, desde las barreras de la calle San Jerónimo, en el barrio Riera, a los semáforos del Fatjó, desde el parque público de Can Mercader a la canalización del Llobregat.

Las elecciones municipales van a concluir en este caso no sólo cuarenta años de despotismo municipal y de anarquía constructora, sino que van a significar también en Cornellà un relevo de clase social en el gobierno de un Ayuntamiento cargado de deudas y problemas, como los 4.000 parados de la población. El 37 por 100 de los socialistas el 1-M, más el 34 por 100 de los comunistas, dará un alcalde de izquierda. A base de huelgas generales que jamás escaparon a las manos de sus dirigentes —Ramos, Navales, Cerdans, Cano, Luque, etc.—, a base de un amplio movimiento asociativo y democrático conectado con la

Asamblea de Catalunya a través de otros dirigentes como Frederic Prieto y Francisco Ruiz y de un admirable trabajo de concienciación en favor de la cultura catalana, la recuperación del Estatuto y la solidaridad con Andalucía y otros pueblos de España, meticulosamente articulados por los profesores y vecinos de Cornellà Ignasi Riera y Juan N. García-Nieto, esta ciudad suburbial ya parió un diputado el 15-J y el 1-M, el dirigente del metal trabajador de Siemens Juan Ramos Camarero, y tendrá ahora un alcalde socialista o comunista.

Al movimiento sindical del Baix Llobregat que combatió la Policía franquista de día y de noche —y sobre todo de madrugada— lo combate ahora la provocación terrorista. El pasado sábado, día 24, una potente bomba hizo explosión causando enormes daños en el local comarcal de Comisiones Obreras. El GRAPO parece que se atribuyó la paternidad del atentado. Tal vez sea ésa la respuesta al paro con que los trabajadores de la comarca reaccionaron, tras el asesinato, en plena campaña por las legislativas del 1 de marzo, de un guardia civil en Esplugas de Llobregat. ■ M. C. V. Fotos: PITU FERNANDEZ.